

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ALC–UE

Foro de la Sociedad Civil ALC–UE | Santa Marta, 7–8 de noviembre de 2025

1. Reunidas en el Foro de la Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Santa Marta, Colombia, las organizaciones representantes de sindicatos, redes, pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGBTQ+, juventudes, cooperativas y entidades sin fines de lucro, subrayamos la importancia de que las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reconozcan la participación significativa, inclusiva, intergeneracional y multisectorial como condición para fortalecer una asociación birregional justa, democrática, sostenible y basada en la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos, que sitúe en el centro a las personas y las comunidades –incluidas las rurales, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad y otras históricamente excluidas.

2. Frente a crisis interconectadas que amenazan la cohesión social, ambiental y económica y que profundizan las desigualdades, la pobreza y la pérdida de espacios democráticos –incluidas las que afectan de manera particular a los países insulares del Caribe, altamente expuestos a la crisis climática, y las vulnerabilidades económicas–, reafirmamos el valor de la paz y el papel esencial de la sociedad civil, las juventudes y los gobiernos locales como actores de paz y contrapeso democrático. Recordamos el carácter de ALC y UE como regiones que deben mantenerse libres de guerra y toda forma de violencia. Llamamos a las y los líderes participantes en la IV Cumbre CELAC–UE a asumir compromisos ambiciosos y medibles que fortalezcan la cooperación horizontal, participativa e inclusiva, basada en la transparencia, justicia social y sostenibilidad.

3. Llamamos la atención sobre los riesgos del debilitamiento del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática, así como de la reducción del espacio cívico, la desinformación y la polarización, que erosionan la cohesión social. En línea con el Acuerdo de Escazú, instamos a garantizar un entorno propicio para la participación significativa de la sociedad civil, personas defensoras, periodistas y medios de comunicación, asegurando su independencia, seguridad, legitimidad y sostenibilidad. Asimismo, pedimos asegurar información accesible y de tecnologías asistivas que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad, junto con la transparencia y acciones concretas que fortalezcan la democracia, el pluralismo político y la participación de la sociedad civil en las políticas públicas.

4. Remarcamos que la IV Cumbre CELAC–UE debe reafirmar el compromiso con la justicia climática, la autodeterminación y gobernanza de los Pueblos Indígenas, comunidades rurales, afrodescendientes y locales, y con los sistemas alimentarios, energéticos y educativos sostenibles, la biodiversidad y la resiliencia climática comunitaria. Se debe priorizar el financiamiento directo, accesible y sostenible; la reparación y protección de los territorios —incluidos sistemas de alerta y acción temprana, y gestión local del riesgo, alineados con el Marco de Sendai y el Acuerdo de París—; la prevención del desplazamiento forzado asociado a crisis climáticas, así como el acceso equitativo a la tierra, el agua y el apoyo diferenciado a mujeres y juventudes rurales, comunidades campesinas, indígenas y personas con discapacidad. Es fundamental fortalecer los sistemas educativos públicos y promover sistemas alimentarios soberanos y sostenibles, impulsando una agro-economía circular que valore la agricultura familiar, los emprendimientos juveniles en el ámbito agrícola y los saberes comunitarios,

garantizando la participación activa de la sociedad civil en el diálogo sobre sistemas alimentarios, en línea con el Plan SAN-CELAC 2030 y el ODS 2. Asimismo, pedimos el desarrollo de sistemas integrales de datos que fortalezcan la toma de decisiones basadas en evidencia. Es vital proteger la Amazonía viva y otras masas boscosas de la región, reconociéndolas como prioridades políticas y éticas de los Estados de la CELAC. Toda cooperación debe garantizar la seguridad jurídica de los territorios, el pleno Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en las decisiones que los afecten.

5. Creemos necesario redefinir el desarrollo más allá del PIB, priorizando la reducción de desigualdades y el cierre de las brechas de financiamiento que frenan los ODS. La cohesión social debe reconocerse como una condición indispensable para revertir desigualdades, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar democracias inclusivas mediante políticas redistributivas y sistemas de protección social basados en derechos. Vemos con preocupación los recortes en cooperación internacional, ayuda humanitaria y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), así como el aumento del gasto militar, cuyos recursos deberían destinarse al desarrollo económico y social birregional. Por ello, pedimos cumplir con los compromisos en AOD, alcanzar el 0,7% del PIB y mejorar su calidad para que sea progresiva, flexible y con métricas sociales y climáticas, garantizando el acceso directo al financiamiento para las OSC locales. Reconocemos además las contribuciones de las personas migrantes a las economías de ambas regiones, a través de remesas, trabajo y aportes fiscales. La inversión birregional debe ser transparente y contribuir a la Agenda 2030. El comercio y las inversiones solo serán sostenibles si garantizan democracia, derechos humanos y protección ambiental. Llamamos a los Jefes de Estado y de Gobierno a adoptar compromisos –incluyendo acuerdos comerciales o mecanismos como la Global Gateway o UE-Mercosur– incluyan cláusulas vinculantes en derechos humanos, laborales y medioambientales; mecanismos de denuncia y participación de la sociedad civil como socia estratégica en su diseño y monitoreo, incluso en alianzas multiactor complementarias, que involucren recursos del sector privado y la filantropías. La Agenda Global Gateway no debe reemplazar la AOD tradicional y debe responder a las prioridades reales de las comunidades, evitando enfoques centrados solo en la infraestructura.

6. Reafirmamos que sin igualdad de género y la plena autonomía económica, física y política de las mujeres, niñas, y juventudes en todas sus diversidades, no hay democracia. Saludamos como punto de partida en el camino hacia esa igualdad sustantiva la adopción del Pacto Birregional por los Cuidados, y demandamos el reconocimiento del cuidado como derecho humano, bien público global y pilar del bienestar; medidas que garanticen los apoyos, y para erradicar todas las formas de violencias machistas y de género; así como la plena participación de la sociedad civil en la implementación, seguimiento y rendición de cuentas del Pacto .

7. En tiempos de transformación digital, recordamos que la tecnología no es neutra y, sin un enfoque de derechos humanos, puede profundizar desigualdades. Por ello, es fundamental incorporar criterios de derechos, sostenibilidad, rendición de cuentas y gobernanza democrática en la Alianza Digital ALC-UE y en el Global Gateway Digital. Debe garantizarse la conectividad asequible, la alfabetización digital crítica y universal y la seguridad en línea —especialmente para mujeres, niñas y personas con discapacidad y comunidades rurales—, así como promover tecnologías asistivas que impulsen la inclusión.

8. Conscientes de que el crimen organizado y la corrupción amenazan la democracia y el bienestar, urge reforzar las estructuras de diálogo birregional y avanzar hacia políticas públicas más homogéneas, preventivas y basadas en evidencia. Reiteramos la necesidad de instituciones fuertes, rendición de cuentas y transparencia, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas de las instituciones públicas para acelerar las investigaciones y garantizar el Estado de derecho. Es fundamental proteger a periodistas, fiscales y personas defensoras que investigan y denuncian casos complejos, armonizar marcos normativos, regular facilitadores del lavado de dinero y garantizar registros transparentes de beneficiarios finales. Frente a amenazas híbridas como la desinformación, el cibercrimen y la criminalización, se requiere una respuesta coordinada y efectiva que ponga los derechos humanos en el centro de toda acción birregional.

9. Reafirmamos que la cohesión social, la igualdad, los derechos humanos, la justicia climática y la democracia participativa son los pilares de la asociación estratégica CELAC-UE. La IV Cumbre CELAC-UE debe asumir compromisos para transversalizar la perspectiva de género e interseccionalidad, erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo, xenofobia y discursos de odio, promover la integración de personas con discapacidad, refugiadas, migrantes y desplazadas, y garantizar salvaguardas sociales, ambientales, de biodiversidad y derechos humanos en todas las políticas e inversiones birregionales. Reconocemos a las juventudes y niñeces como actores estratégicos de la democracia y del desarrollo sostenible, cuyo papel debe fortalecerse mediante la educación, el empleo digno, la movilidad académica y la participación intergeneracional efectiva. Exhortamos a los Estados a fortalecer el espacio cívico y e inclusión efectiva de movimientos sindicales y sociales, juventudes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas refugiadas, migrantes y desplazadas, con discapacidad, y comunidades marginadas, y garantizar derechos —incluido el acceso al trabajo decente, la vivienda digna, la educación, la salud, los cuidados y la protección social— en la construcción de sociedades democráticas, justas, sostenibles y pacíficas

10. Para que estas propuestas sean sostenibles, la IV Cumbre CELAC-UE debe formalizar un mecanismo birregional multiactor de seguimiento y diálogo, con participación efectiva y accesible de la sociedad civil organizada, los sindicatos, los movimientos de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, caribeñas e insulares, rurales y con discapacidad, los gobiernos locales, la academia, las empresas cooperativas y de la economía social, el sector privado y otros actores interesados. Se recomienda fortalecer y adaptar los espacios ya existentes de participación de la sociedad civil, garantizando su sostenibilidad, inclusión y capacidad de incidencia. Solo con una voz ciudadana fuerte y reconocida se podrá construir una cooperación legítima, eficaz y transformadora.

La sociedad civil no pide espacio: ya lo ocupa, lo construye y lo defiende. No hay desarrollo sin derechos, no hay justicia sin igualdad, no hay futuro sin democracia.

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025

Foro de la Sociedad Civil ALC–UE

CIVIL SOCIETY DECLARATION LATIN AMERICA AND CARIBBEAN – EU

Civil Society Forum Latin America, the Caribbean and the European Union | Santa Marta, 7–8 November 2025

1. Gathered at the Civil Society Forum of Latin America, the Caribbean and the European Union in Santa Marta, Colombia, the organisations representing trade unions, networks, Indigenous Peoples, women, the LGBTIQ+ community, youth, cooperatives and non-profit entities underscore the importance of the Heads of State and Government of the European Union (EU) and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) recognising meaningful, inclusive, intergenerational and multisectoral participation as a condition for strengthening a just, democratic, sustainable bi-regional partnership based on the United Nations Charter and human rights — which places people and communities at its centre, including rural, migrant, Afro-descendant, disabled and other historically excluded groups.

2. Faced with interconnected crises that threaten social, environmental and economic cohesion and deepen inequalities, poverty and the erosion of democratic spaces — including those affecting particularly the island States of the Caribbean, highly exposed to the climate crisis, and their economic vulnerabilities — we reaffirm the value of peace and the essential role of civil society, youth and local governments as peace actors and democratic counterweights. We recall the character of the LAC and EU as regions that must remain free from war and all forms of violence. We call on the leaders participating in the 4th CELAC-EU Summit to assume ambitious and measurable commitments that strengthen horizontal, participatory and inclusive cooperation, grounded in transparency, social justice and sustainability.

3. We draw attention to the risks posed by the weakening of the rule of law and democratic institutions, as well as the shrinking civic space, disinformation and polarization, which erode social cohesion. In line with the Escazú Agreement, we urge the guarantee of an enabling environment for meaningful participation of civil society, human rights defenders, journalists and media, ensuring their independence, safety, legitimacy and sustainability. Likewise, we ask for accessible information and assistive technologies that ensure the full participation of persons with disabilities, along with transparency and concrete actions that strengthen democracy, political pluralism and civil society participation in public policy.

4. We emphasise that the 4th CELAC-EU Summit must reaffirm the commitment to climate justice, the self-determination and governance of Indigenous Peoples, rural, Afro-descendant and local communities, and to sustainable food, energy and education systems, biodiversity and community climate resilience. Priority must be given to direct, accessible and sustainable financing; to the repair and protection of territories—including early-warning and early-action systems, and local risk management aligned with the Sendai Framework and the Paris Agreement; to prevention of forced displacement associated with climate crises; as well as equitable access to land and water, and differentiated support for rural women and youth, peasant and indigenous communities and persons with disabilities. It is fundamental to strengthen public education systems and promote sovereign and sustainable food systems, fostering a circular agro-economy that values family farming, youth entrepreneurship in agriculture and community knowledge, guaranteeing active participation of civil society in the

dialogue on food systems, aligned with the SAN-CELAC 2030 Plan and SDG 2. We also call for the development of comprehensive data systems that strengthen evidence-based decision-making. It is vital to protect the living Amazon and other forest masses in the region, recognising them as political and ethical priorities of the CELAC States. All cooperation must guarantee legal security of territories, full Free, Prior and Informed Consent (FPIC) and effective participation of Indigenous Peoples in decisions that affect them.

5. We believe it is necessary to redefine development beyond GDP, prioritising the reduction of inequalities and closing the financing gaps that hinder the SDGs. Social cohesion must be recognised as an indispensable condition to reverse inequalities, strengthen citizen trust and consolidate inclusive democracies through redistributive policies and rights-based social protection systems. We view with concern the cuts in international cooperation, humanitarian aid and Official Development Assistance (ODA), as well as the increase in military spending, whose resources should be allocated to bi-regional economic and social development. For this reason, we call for fulfilling ODA commitments, reaching 0.7% of GDP and improving its quality so that it is progressive, flexible and includes social and climate metrics, guaranteeing direct access to financing for local CSOs. We also recognise the contributions of migrants to the economies of both regions through remittances, labour and tax contributions. Bi-regional investment must be transparent and contribute to the 2030 Agenda. Trade and investments will only be sustainable if they guarantee democracy, human rights and environmental protection. We call on the Heads of State and Government to adopt commitments — including trade agreements or mechanisms such as the Global Gateway or EU–Mercosur — that include binding clauses on human, labour and environmental rights; complaint mechanisms and participation of civil society as strategic partner in their design and monitoring, even in multi-actor complementary partnerships involving private sector resources and philanthropy. The Global Gateway agenda must not replace traditional ODA and must respond to the real priorities of communities, avoiding infrastructure-only approaches.

6. We reaffirm that without gender equality and the full economic, physical and political autonomy of women, girls and youth in all their diversities, there is no democracy. We welcome as a starting point on the path towards that substantive equality the adoption of the Bi-regional Care Pact, and demand the recognition of care as a human right, a global public good and pillar of wellbeing; measures that guarantee support, and to eradicate all forms of patriarchal and gender-based violence; as well as the full participation of civil society in the implementation, monitoring and accountability of the Pact.

In times of digital transformation, we recall that technology is not neutral and, without a rights-based approach, it can deepen inequalities. Therefore, it is fundamental to incorporate rights, sustainability, accountability and democratic governance criteria in the Latin America–Caribbean–EU Digital Alliance and the Global Gateway Digital. Affordable connectivity, universal and critical digital literacy and online security — especially for women, girls, persons with disabilities and rural communities — must be guaranteed, as well as the promotion of assistive technologies that drive inclusion.

Aware that organised crime and corruption threaten democracy and wellbeing, we must reinforce the bi-regional dialogue structures and advance towards more homogeneous, preventive and evidence-based public policies. We reiterate the need for strong institutions, accountability and transparency, as well as the strengthening of technical and technological capacities of public institutions to accelerate investigations and guarantee the rule of law. It is essential to protect journalists, prosecutors and human rights defenders who investigate and

denounce complex cases, harmonise regulatory frameworks, regulate money-laundering facilitators and guarantee transparent registers of ultimate beneficiaries. Faced with hybrid threats such as disinformation, cybercrime and criminalisation, a coordinated and effective response is required that puts human rights at the centre of all bi-regional action.

We reaffirm that social cohesion, equality, human rights, climate justice and participatory democracy are the pillars of the CELAC-EU strategic partnership. The 4th CELAC-EU Summit must assume commitments to mainstream gender and intersectionality perspectives, eradicate all forms of violence, discrimination, racism, xenophobia and hate speech, promote the integration of persons with disabilities, refugees, migrants and displaced persons, and guarantee social, environmental, biodiversity and human rights safeguards in all bi-regional policies and investments. We recognise youth and children as strategic actors of democracy and sustainable development, whose role must be strengthened through education, decent employment, academic mobility and effective intergenerational participation. We urge States to strengthen civic space and effective inclusion of trade unions and social movements, youth, Indigenous Peoples, Afro-descendant persons, refugees, migrants and displaced persons, persons with disabilities, and marginalised communities, and to guarantee rights — including access to decent work, decent housing, education, health, care and social protection — in the construction of democratic, just, sustainable and peaceful societies.

To ensure that these proposals are sustainable, the 4th CELAC-EU Summit must formalise a multi-actor bi-regional monitoring and dialogue mechanism, with effective and accessible participation of organised civil society, trade unions, women's movements, youth, Indigenous Peoples, Afro-descendant, Caribbean and island and rural and disabled communities, local governments, academia, cooperatives and social economy enterprises, the private sector and other interested actors. It is recommended to strengthen and adapt the already existing spaces for civil society participation, guaranteeing their sustainability, inclusion and capacity to influence. Only with a strong and recognised citizen voice can legitimate, effective and transformative cooperation be built.

Civil society does not ask for space: it already occupies it, builds it and defends it. There is no development without rights, no justice without equality, no future without democracy.

DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ALC-UE
Forum de la Société Civile Amérique Latine, Caraïbes – Union Européenne | Santa Marta, 7–8 novembre 2025

1. Réunies au Forum de la Société Civile Amérique latine, Caraïbes et Union européenne à Santa Marta (Colombie), les organisations représentant les syndicats, réseaux, peuples autochtones, femmes, la communauté LGBTQ+, les jeunes, les coopératives et les entités à but non lucratif soulignent l'importance que les Cheffes et Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union européenne (UE) et de la Communauté d'États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) reconnaissent une participation significative, inclusive, intergénérationnelle et multisectorielle comme condition pour renforcer un partenariat birégional juste, démocratique, durable et fondé sur la Charte des Nations Unies et les droits humains — qui place les personnes et les communautés au centre, y compris les populations rurales, migrantes, afro-descendantes, en situation de handicap et autres historiquement exclues.
2. Face à des crises interdépendantes qui menacent la cohésion sociale, environnementale et économique et approfondissent les inégalités, la pauvreté et la perte des espaces démocratiques — y compris celles qui affectent de manière particulière les États insulaires des Caraïbes, très exposés à la crise climatique, et leurs vulnérabilités économiques — nous réaffirmons la valeur de la paix et le rôle essentiel de la société civile, des jeunes et des gouvernements locaux en tant qu'acteurs de paix et contre-poids démocratique. Nous rappelons que les régions ALC et UE doivent rester libres de guerre et de toute forme de violence. Nous appelons les dirigeantes et les dirigeants participant au IV Sommet CELAC-UE à assumer des engagements ambitieux et mesurables qui renforcent une coopération horizontale, participative et inclusive, fondée sur la transparence, la justice sociale et la durabilité.
3. Nous attirons l'attention sur les risques liés à l'affaiblissement de l'État de droit et de l'institutionnalité démocratique, ainsi qu'à la réduction de l'espace civique, à la désinformation et à la polarisation, qui érodent la cohésion sociale. Conformément à l'Accord d'Escazú, nous exhortons à garantir un environnement propice à la participation significative de la société civile, des personnes défenseuses des droits, des journalistes et des médias, en assurant leur indépendance, sécurité, légitimité et durabilité. De même, nous demandons de garantir des informations accessibles et des technologies d'assistance qui assurent la pleine participation des personnes en situation de handicap, ainsi que la transparence et des actions concrètes qui renforcent la démocratie, le pluralisme politique et la participation de la société civile dans les politiques publiques.
4. Nous soulignons que le IV Sommet CELAC-UE doit réaffirmer l'engagement en faveur de la justice climatique, de l'autodétermination et de la gouvernance des peuples autochtones, des communautés rurales, afro-descendantes et locales, ainsi que des systèmes alimentaires, énergétiques et éducatifs durables, de la biodiversité et de la résilience climatique communautaire. Il faut prioriser le financement direct, accessible et durable ; la réparation et la protection des territoires — y compris les systèmes d'alerte et d'action précoce et la gestion locale du risque, alignés sur le Cadre de Sendai et l'Accord de Paris ; la prévention des déplacements forcés liés aux crises climatiques, ainsi que l'accès équitable à la terre, à l'eau et le soutien différencié aux femmes et aux jeunes rurales, aux communautés paysannes, autochtones et aux personnes en situation de handicap. Il est fondamental de renforcer les systèmes éducatifs publics et de promouvoir des systèmes alimentaires souverains et durables,

en impulsant une agro-économie circulaire qui valorise l'agriculture familiale, l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole et les savoirs communautaires, garantissant la participation active de la société civile dans le dialogue sur les systèmes alimentaires, en ligne avec le Plan SAN-CELAC 2030 et l'ODD 2. De même, nous demandons le développement de systèmes intégrés de données qui renforcent la prise de décisions fondées sur les preuves. Il est vital de protéger l'Amazonie vivante et d'autres masses forestières de la région, en les reconnaissant comme des priorités politiques et éthiques des États de la CELAC. Toute coopération doit garantir la sécurité juridique des territoires, le plein Consentement Libre, Préalable et Informé (CLPI) et la participation effective des peuples autochtones dans les décisions qui les concernent.

5. Nous estimons nécessaire de redéfinir le développement au-delà du PIB, en priorisant la réduction des inégalités et la fermeture des écarts de financement qui freinent les ODD. La cohésion sociale doit être reconnue comme une condition indispensable pour inverser les inégalités, renforcer la confiance citoyenne et consolider des démocraties inclusives par des politiques redistributives et des systèmes de protection sociale fondés sur les droits. Nous observons avec inquiétude les réductions de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de l'Aide Publique au Développement (APD), ainsi que l'augmentation des dépenses militaires, dont les ressources devraient être affectées au développement économique et social birégional. C'est pourquoi nous appelons à respecter les engagements en matière d'APD, à atteindre 0,7 % du PIB et à améliorer sa qualité afin qu'elle soit progressive, flexible et dotée de métriques sociales et climatiques, en garantissant l'accès direct au financement pour les OSC locales. Nous reconnaissons également les contributions des personnes migrantes aux économies des deux régions, par les envois de fonds, le travail et les contributions fiscales. L'investissement birégional doit être transparent et contribuer à l'Agenda 2030. Le commerce et les investissements ne seront durables que s'ils garantissent la démocratie, les droits humains et la protection de l'environnement. Nous appelons les Cheffes et Chefs d'État et de Gouvernement à adopter des engagements — y compris des accords commerciaux ou des mécanismes tels que le Global Gateway ou UE-Mercosur — qui incluent des clauses contraignantes en matière de droits humains, de droits du travail et d'environnement ; des mécanismes de plainte et la participation de la société civile comme partenaire stratégique dans leur conception et leur suivi, y compris dans des alliances multi-acteurs complémentaires qui associent des ressources du secteur privé et la philanthropie. L'agenda Global Gateway ne doit pas remplacer l'APD traditionnelle et doit répondre aux priorités réelles des communautés, en évitant des approches centrées uniquement sur l'infrastructure.
6. Nous réaffirmons que sans l'égalité de genre et la pleine autonomie économique, physique et politique des femmes, des filles et des jeunes dans toutes leurs diversités, il n'y a pas de démocratie. Nous saluons comme point de départ sur le chemin vers cette égalité substantielle l'adoption du Pacte Birégional pour les Soins, et exigeons la reconnaissance des soins comme droit humain, bien public mondial et pilier du bien-être ; des mesures qui garantissent les soutiens, et pour éradiquer toutes les formes de violences machistes et sexistes ; ainsi que la pleine participation de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et la reddition de comptes du Pacte.
7. À l'ère de la transformation digitale, nous rappelons que la technologie n'est pas neutre et, sans une approche fondée sur les droits, elle peut approfondir les inégalités. Par conséquent, il est fondamental d'intégrer des critères de droits, de durabilité, de

reddition de comptes et de gouvernance démocratique dans l'Alliance numérique ALC-UE et le Global Gateway Digital. Une connectivité abordable, une littératie numérique critique et universelle et la sécurité en ligne — en particulier pour les femmes, les filles, les personnes en situation de handicap et les communautés rurales — doivent être garanties, ainsi que la promotion de technologies d'assistance qui favorisent l'inclusion.

8. Conscientes que le crime organisé et la corruption menacent la démocratie et le bien-être, il est urgent de renforcer les structures de dialogue birégional et d'avancer vers des politiques publiques plus homogènes, préventives et fondées sur les preuves. Nous réitérons la nécessité d'institutions fortes, de reddition de comptes et de transparence, ainsi que le renforcement des capacités techniques et technologiques des institutions publiques pour accélérer les enquêtes et garantir l'État de droit. Il est essentiel de protéger les journalistes, les procureurs et les personnes défenseuses des droits qui enquêtent et dénoncent des affaires complexes, d'harmoniser les cadres normatifs, de réguler les facilitateurs du blanchiment d'argent et de garantir des registres transparents des bénéficiaires effectifs. Face à des menaces hybrides telles que la désinformation, la cybercriminalité et la criminalisation, une réponse coordonnée et efficace est requise qui place les droits humains au centre de toute action birégionale.
9. Nous réaffirmons que la cohésion sociale, l'égalité, les droits humains, la justice climatique et la démocratie participative sont les piliers du partenariat stratégique CELAC-UE. Le IV Sommet CELAC-UE doit assumer des engagements pour transversaliser les perspectives de genre et d'intersectionnalité, éradiquer toutes les formes de violences, de discrimination, de racisme, de xénophobie et de discours de haine, promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap, des réfugiées, migrantes et déplacées, et garantir des garanties sociales, environnementales, de biodiversité et de droits humains dans toutes les politiques et investissements birégionaux. Nous reconnaissons les jeunes et les enfants comme des acteurs stratégiques de la démocratie et du développement durable, dont le rôle doit être renforcé par l'éducation, un emploi décent, la mobilité académique et une participation intergénérationnelle effective. Nous exhortons les États à renforcer l'espace civique et l'inclusion effective des mouvements syndicaux et sociaux, des jeunes, des peuples autochtones, des personnes afro-descendantes, des réfugiées, migrantes et déplacées, des personnes en situation de handicap, et des communautés marginalisées, et à garantir des droits — y compris l'accès à un travail décent, un logement décent, l'éducation, la santé, les soins et la protection sociale — dans la construction de sociétés démocratiques, justes, durables et pacifiques.
10. Pour que ces propositions soient durables, le IV Sommet CELAC-UE doit formaliser un mécanisme birégional multi-acteurs de suivi et de dialogue, avec la participation effective et accessible de la société civile organisée, des syndicats, des mouvements de femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des communautés afro-descendantes, caribéennes et insulaires, rurales et avec handicap, des gouvernements locaux, du monde académique, des entreprises coopératives et de l'économie sociale, du secteur privé et d'autres acteurs intéressés. Il est recommandé de renforcer et d'adapter les espaces déjà existants de participation de la société civile, en garantissant leur durabilité, inclusion et capacité d'influence. Ce n'est qu'avec une voix citoyenne forte et reconnue que l'on pourra bâtir une coopération légitime, efficace et transformatrice.

La société civile ne demande pas un espace : elle l'occupe déjà, le construit et le défend. Il n'y a pas de développement sans droits, pas de justice sans égalité, pas d'avenir sans démocratie.

Santa Marta,
Forum de la Société Civile ALC-UE

8

novembre

2025

DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ALC-UE
Fórum da Sociedade Civil América Latina, Caribe e União Europeia | Santa Marta, 7–8 de novembro de 2025

1. Reunidas no Fórum da Sociedade Civil da América Latina, Caribe e União Europeia em Santa Marta, Colômbia, as organizações que representam sindicatos, redes, povos indígenas, mulheres, comunidade LGBTQI+, juventudes, cooperativas e entidades sem fins lucrativos ressaltam a importância de que os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) reconheçam a participação significativa, inclusiva, intergeracional e multissetorial como condição para fortalecer uma parceria birregional justa, democrática, sustentável e baseada na Carta das Nações Unidas e nos direitos humanos — que coloque no centro as pessoas e as comunidades — incluindo as rurais, migrantes, afro-descendentes, com deficiência e outras historicamente excluídas.
2. Diante de crises interconectadas que ameaçam a coesão social, ambiental e económica e aprofundam as desigualdades, a pobreza e a perda de espaços democráticos — inclusive aquelas que afetam de modo particular os países insulares do Caribe, altamente expostos à crise climática, e suas vulnerabilidades económicas — reafirmamos o valor da paz e o papel essencial da sociedade civil, das juventudes e dos governos locais como atores de paz e contrapesos democráticos. Recordamos a condição das regiões ALC e UE como zonas que devem permanecer livres de guerra e de toda forma de violência. Exortamos as/os líderes participantes da 4.^a Cimeira CELAC-UE a assumirem compromissos ambiciosos e mensuráveis que fortaleçam a cooperação horizontal, participativa e inclusiva, baseada na transparência, justiça social e sustentabilidade.
3. Chamamos a atenção para os riscos do enfraquecimento do Estado de direito e da institucionalidade democrática, bem como da redução do espaço cívico, da desinformação e da polarização, que erosionam a coesão social. Em conformidade com o Acordo de Escazú, instamos a garantir um ambiente propício à participação significativa da sociedade civil, pessoas defensoras, jornalistas e meios de comunicação, assegurando sua independência, segurança, legitimidade e sustentabilidade. Da mesma forma, pedimos que se assegure informação acessível e tecnologias assistivas que garantam a plena participação das pessoas com deficiência, bem como transparência e ações concretas que fortaleçam a democracia, o pluralismo político e a participação da sociedade civil nas políticas públicas.
4. Enfatizamos que a 4.^a Cimeira CELAC-UE deve reafirmar o compromisso com a justiça climática, a autodeterminação e governança dos Povos Indígenas, das comunidades rurais, afro-descendentes e locais, e com os sistemas alimentares, energéticos e educacionais sustentáveis, a biodiversidade e a resiliência climática comunitária. Deve-se priorizar o financiamento direto, acessível e sustentável; a reparação e proteção dos territórios — incluídos sistemas de alerta e ação precoce, e gestão local de risco, alinhados ao Quadro de Sendai e ao Acordo de Paris; a prevenção do deslocamento forçado associado às crises climáticas, bem como o acesso equitativo à terra, à água e o apoio diferenciado a mulheres e juventudes rurais, comunidades camponesas, indígenas e pessoas com deficiência. É fundamental fortalecer os sistemas educacionais públicos e promover sistemas alimentares soberanos e sustentáveis, impulsionando uma agro-economia circular que valorize a agricultura familiar, o empreendedorismo juvenil no âmbito agrícola e

os saberes comunitários, garantindo a participação ativa da sociedade civil no diálogo sobre sistemas alimentares, em linha com o Plano SAN-CELAC 2030 e o ODS 2. Também pedimos o desenvolvimento de sistemas integrais de dados que fortaleçam a tomada de decisões com base em evidências. É vital proteger a Amazônia viva e outras massas florestais da região, reconhecendo-as como prioridades políticas e éticas dos Estados da CELAC. Toda cooperação deve garantir a segurança jurídica dos territórios, o pleno Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) e a participação efetiva dos Povos Indígenas nas decisões que os afetem.

5. Consideramos necessário redefinir o desenvolvimento para além do PIB, priorizando a redução das desigualdades e o fechamento das brechas de financiamento que freiam os ODS. A coesão social deve ser reconhecida como uma condição indispensável para reverter as desigualdades, fortalecer a confiança cidadã e consolidar democracias inclusivas por meio de políticas redistributivas e sistemas de proteção social baseados em direitos. Vemos com preocupação os cortes na cooperação internacional, ajuda humanitária e Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), bem como o aumento do gasto militar, cujos recursos deveriam ser destinados ao desenvolvimento económico e social birregional. Por isso, pedimos que se cumpram os compromissos em APD, que se atinja 0,7 % do PIB e que se melhore sua qualidade para que seja progressiva, flexível e com métricas sociais e climáticas, garantindo o acesso direto ao financiamento para as OSC locais. Reconhecemos também as contribuições das pessoas migrantes às economias de ambas as regiões, por meio de remessas, trabalho e aportes fiscais. O investimento birregional deve ser transparente e contribuir para a Agenda 2030. O comércio e os investimentos só serão sustentáveis se garantirem democracia, direitos humanos e proteção ambiental. Apelamos aos Chefes de Estado e de Governo para adotarem compromissos — incluindo acordos comerciais ou mecanismos como o Global Gateway ou UE-Mercosul — que incluam cláusulas vinculantes em direitos humanos, laborais e ambientais; mecanismos de denúncia e participação da sociedade civil como parceira estratégica no seu desenho e monitoramento, inclusive em alianças multiactor complementares, que envolvam recursos do setor privado e da filantropia. A agenda Global Gateway não deve substituir a APD tradicional e deve responder às prioridades reais das comunidades, evitando abordagens centradas apenas em infraestrutura.
6. Reafirmamos que sem igualdade de género e a plena autonomia económica, física e política das mulheres, meninas e juventudes em todas as suas diversidades, não há democracia. Aplaudimos como ponto de partida no caminho para essa igualdade substantiva a adopção do Pacto Birregional pelos Cuidados, e exigimos o reconhecimento do cuidado como direito humano, bem público global e pilar do bem-estar; medidas que assegurem os apoios, e para erradicar todas as formas de violência machista e de género; bem como a plena participação da sociedade civil na implementação, seguimento e rendição de contas do Pacto.
7. Em tempos de transformação digital, lembramos que a tecnologia não é neutra e, sem uma abordagem de direitos humanos, pode aprofundar desigualdades. Por isso, é fundamental incorporar critérios de direitos, sustentabilidade, rendição de contas e governação democrática na Aliança Digital ALC-UE e no Global Gateway Digital. Deve-se garantir conectividade acessível, literacia digital crítica e universal e segurança online — especialmente para mulheres, meninas e pessoas com deficiência e comunidades rurais —, bem como promover tecnologias assistivas que impulsionem a inclusão.

8. Cientes de que o crime organizado e a corrupção ameaçam a democracia e o bem-estar, urge reforçar as estruturas de diálogo birregional e avançar para políticas públicas mais homogêneas, preventivas e baseadas em evidências. Reiteramos a necessidade de instituições fortes, rendição de contas e transparência, bem como o fortalecimento das capacidades técnicas e tecnológicas das instituições públicas para acelerar as investigações e garantir o Estado de direito. É fundamental proteger jornalistas, procuradores e pessoas defensoras que investigam e denunciam casos complexos, harmonizar marcos normativos, regular facilitadores da lavagem de dinheiro e garantir registos transparentes de beneficiários finais. Face a ameaças híbridas como a desinformação, o cibercrime e a criminalização, requer-se uma resposta coordenada e eficaz que coloque os direitos humanos no centro de toda ação birregional.
9. Reafirmamos que a coesão social, a igualdade, os direitos humanos, a justiça climática e a democracia participativa são os pilares da parceria estratégica CELAC-UE. A 4.^a Cimeira CELAC-UE deve assumir compromissos para transversalizar a perspectiva de género e interseccionalidade, erradicar todas as formas de violência, discriminação, racismo, xenofobia e discurso de ódio, promover a integração das pessoas com deficiência, das refugiadas, migrantes e deslocadas, e garantir salvaguardas sociais, ambientais, de biodiversidade e de direitos humanos em todas as políticas e investimentos birregionais. Reconhecemos as juventudes e a infância como atores estratégicos da democracia e do desenvolvimento sustentável, cujo papel deve ser reforçado através da educação, emprego digno, mobilidade académica e participação intergeracional efectiva. Exortamos os Estados a reforçar o espaço cívico e a inclusão efectiva de movimentos sindicais e sociais, juventudes, povos indígenas, pessoas afro-descendentes, pessoas refugiadas, migrantes e deslocadas, pessoas com deficiência, e comunidades marginalizadas, e garantir direitos — incluindo acesso ao trabalho decente, habitação digna, educação, saúde, cuidados e proteção social — na construção de sociedades democráticas, justas, sustentáveis e pacíficas.
10. Para que estas propostas sejam sustentáveis, a 4.^a Cimeira CELAC-UE deve formalizar um mecanismo birregional multiactor de seguimento e diálogo, com participação efectiva e acessível da sociedade civil organizada, dos sindicatos, movimentos de mulheres, juventudes, povos indígenas, comunidades afro-descendentes, caribenhas e insulares, rurais e com deficiência, governos locais, academia, empresas cooperativas e da economia social, o setor privado e outros atores interessados. Recomenda-se reforçar e adaptar os espaços já existentes de participação da sociedade civil, garantindo sua sustentabilidade, inclusão e capacidade de impacto. Só com uma voz cidadã forte e reconhecida se poderá construir uma cooperação legítima, eficaz e transformadora.

A sociedade civil não pede espaço: ela já o ocupa, o constrói e o defende. Não há desenvolvimento sem direitos, não há justiça sem igualdade, não há futuro sem democracia.

Santa Marta, 8 de novembro de 2025
Fórum da Sociedade Civil ALC-UE